

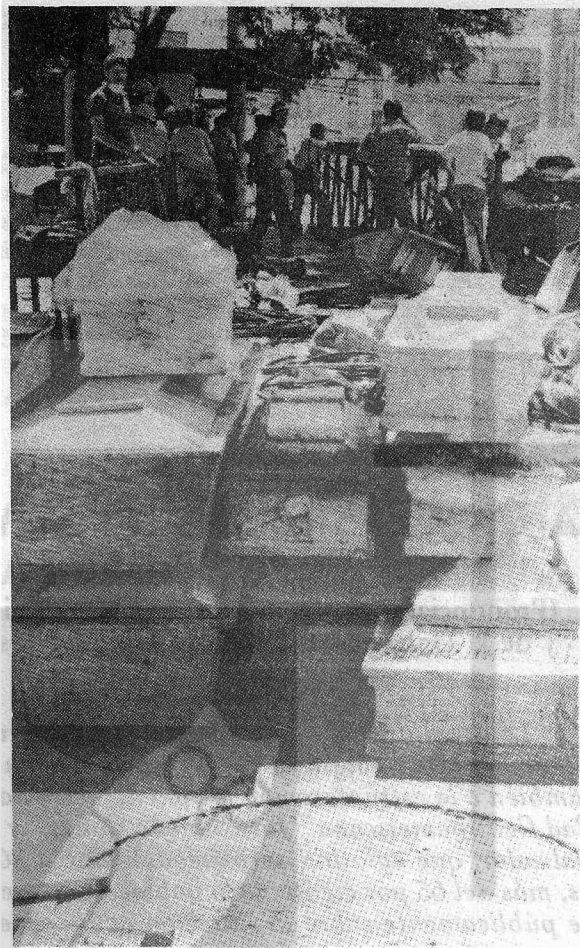
LA UNIVERSIDAD ANTE LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS

(Pronunciamiento conjunto de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas")

La acumulación de acontecimientos que van afectando tan profundamente no sólo a la mayor parte del pueblo salvadoreño sino también a la estructuración misma del país, ha movido a la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" y a la Universidad de El Salvador, que aglutina aproximadamente a 36.000 estudiantes, esto es, más del 65 por ciento de la población universitaria, a pronunciarse públicamente sobre la situación actual que vive El Salvador.

1. Responsabilidad de las universidades ante la situación del país

Las universidades por su propia naturaleza histórica tienen una misión bien precisa en la estructura social. Al tener la máxima responsabilidad de la educación superior, tienen también los derechos y las obligaciones que esta responsabilidad exige. Esa responsabilidad se centra ante todo en lo cultural y en lo científico, que lleva consigo la asimilación, transformación y transmisión de aquellos saberes y técnicas que son necesarios para el crecimiento integral del país; conlleva asimismo la formación de profesionales, intelectuales e investigadores que traduzcan en acciones efectivas lo que es el aporte de la cultura y de la ciencia a la sociedad. Pero esa responsabilidad se extiende también a la marcha histórica del país en el cual está implantada, del cual vive y para el cual debe trabajar. Otras instituciones tienen también esta responsabilidad. Pero la universidad debe ejercerla desde el saber científico que escudriña la realidad nacional en todos sus aspectos y transmite ese saber para que pueda convertirse en conciencia nacional y en instrumento de transformación ética y política.



Esta responsabilidad ha ido cumpliéndose a lo largo de los años por la Universidad de El Salvador y a ella ha dedicado la UCA durante los últimos 20 años sus mejores esfuerzos. Sin embargo, la multiplicación de universidades, en lugar de fortalecer el influjo de la universidad en la sociedad, lo ha debilitado. La universidad no tiene hoy el peso social que le corresponde y que ha tenido en la historia de El Salvador. Pensamos que un mayor compromiso y una unidad mayor entre ellas a la hora de ejercer ese influjo social puede ayudar a realizar mejor su misión histórica.

2. El terremoto del 10 de octubre, una nueva llamada a la conciencia universitaria

El 10 de octubre El Salvador sufrió tal vez el mayor terremoto de su historia no sólo por la intensidad del sismo, sino porque sus efectos se sintieron en el área metropolitana, donde se concentra más de una quinta parte de la población nacional. Los más de mil muertos, diez mil heridos de distinta consideración, los doscientos

mil damnificados en sus casas y en sus propiedades, las pérdidas que superan con mucho, aun antes de cerrar la cuenta, todo lo que es el presupuesto nacional de 2 años, constituyen un durísimo golpe sobre una población y un país ya golpeados secularmente por una pobreza masiva y, en los últimos años, por la guerra. Esta nueva calamidad, en vez de abatir más al pueblo y de rebajar su nivel de humanidad, ha supuesto un incentivo para sacar lo mejor de sí, para mostrar una vez más la energía, la capacidad de compasión y de solidaridad que se esconde en la mayor parte del pueblo salvadoreño; apenas puede hablarse de aspectos negativos, porque los pequeños intentos de pillaje o los abusos de quienes han querido lucrar del dolor y de la necesidad ajenos no pueden compararse con los esfuerzos entusiastas y solidarios para superar la desgracia. Otra vez se ha demostrado que El Salvador es un gran pueblo del cual se puede esperar lo mejor, si se le permite hacerlo.

Pero el terremoto ha descubierto también la profunda injusticia estructural que conforma nuestra sociedad. Ante los ojos de todos ha vuelto a surgir la imagen de cómo vive la mayor parte del pueblo en lo que es la capital de El Salvador: una gran cantidad de viviendas no sólo son indignas de las personas que en ellas viven, sino que ni siquiera ofrecen suficiente seguridad; los desplazados de la guerra han venido a agravar una situación ya de por sí intolerable; gentes inescrupulosas habían construido o reconstruido tan mal que son presuntos responsables de la mayor parte de las víctimas; los gobiernos de turno no habían tomado en consideración una situación potencialmente calamitosa y habían olvidado regirse por el bien común y por las necesidades básicas de las mayorías populares; la empresa privada no ha sido capaz de impulsar un desarrollo mínimamente suficiente para una población que crece sin control.

Todo esto y mucho más ya se sabía y había sido analizado por estudios de nuestras universidades, por prédicas de las iglesias y por discursos de los políticos. Pero el estremecimiento que sacudió conjuntamente a la tierra y a la conciencia lo ha vuelto a poner en carne viva, en reclamo urgente para que se haga algo serio por poner remedio a tan gravísima situación.

3. El otro, mayor y permanente, terremoto de la guerra

Las ruinas del terremoto del 10 de octubre vinieron a acumularse sobre las ruinas mayores de la guerra y éstas a su vez sobre los fundamentos ruinosos de una sociedad mal configurada. Pese a que en el período 1950-1978 la tasa de crecimiento económico del producto interno bruto en El Salvador fue de 25.8 por ciento y el incre-

Después del terremoto, cuando ha de hacerse frente no sólo a la tarea de reactivación, sino que se han de intentar paliar los 4 ó 5 mil millones de colones en pérdidas, carece de sentido mantener en sus mismos términos el presupuesto nacional.

mento por habitante, no obstante el enorme aumento de población, pasó de 203 a 347 dólares, la distribución del mismo había sido tan incorrecta que hacia finales de la década de los setenta, según estimaciones de la CEPAL, el 68.1 por ciento de la población salvadoreña vivía en estado de pobreza, esto es, no tenía lo mínimamente suficiente para alimentarse y/o no tenía lo mínimamente suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, vestido, salud y educación. Ahí radicó el principio fundamental del conflicto social, cuya última expresión ha sido la guerra, de la que las causas son fundamentalmente endógenas, aunque hoy haya sido encuadrada en el conflicto de la hegemonía de las grandes potencias.

Es la guerra actualmente el gran terremoto del país. Sus víctimas y sus efectos son mucho mayores que los del terremoto, aunque las de éste fueron más fulminantes. Las cifras se han vuelto ya utópicas, pero no por ello dejan de ser terribles y aleccionadoras: más de sesenta mil muertos, más de quinientos mil desplazados y obligados a vivir en condiciones inhumanas, más de quinientos mil forzados a subsistir fuera de nuestras fronteras, más de un 50 por ciento sin trabajo habitual, casi la mitad de la tierra laborable sin cultivo adecuado, el PIB por habitantes rebajados a los niveles del año 1965, un país en suma descoyuntado por terribles movimientos sociales con una economía de guerra y para la guerra, esto es, para la destrucción del país y no para su rehabilitación.

La nueva experiencia del terremoto del 10 de octubre nos ha mostrado por lo pronto que el gobierno no tiene recursos para enfrentar ni siquiera mínimamente sus reducidos daños y nos ha recordado que el gobierno y el presupuesto nacional siguen fomentando, en respuesta al desafío militar del FMLN, la destrucción del país y desde luego la retirada de recursos de las tareas de construcción. Fuentes gubernamentales han reiterado que en el año actual cerca del 50 por ciento del presupuesto iba dirigido directa o indirectamente a la guerra, sin olvidar los cientos de millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos dedica al conflicto armado, esto es, a la destrucción física del país. Este largo y terrible terremoto dura ya más de 6 años y no se ve cuándo pueda terminar, pues los cálculos más optimistas ponen su finalización no antes de 4 años. Las medidas tomadas antes del sismo telúrico tanto para recabar nuevos impuestos como para distribuir los ingresos nacionales estaban dirigidas prioritariamente a la guerra, como lo están las ayudas norteamericanas orientadas según sus intereses políticos y no según nuestros intereses políticos. Así tenemos que sólo un 14.3 por ciento del presupuesto nacional está destinado al ramo de educación, cuando en tiempos mejores superábamos el 20 por ciento habitualmente, y sólo el 8.2 por ciento está destinado a la salud y asistencia social, mientras que el ramo de defensa y de seguridad pública tienen asignados un 25.5 por ciento. El gobierno quiere terminar con el terremoto de la guerra fundamentalmente a través del terremoto de la guerra, de la prolongación de ese terremoto, que tan terribles consecuencias materiales y morales tiene para el país.

Se viene hablando mucho de pacificación, de democratización y de reactivación económica, pero esto es imposible en estado de guerra y dando a la guerra la primacía en las decisiones del Estado. Guerra y pacificación se contradicen, democratización y militarización se contradicen, reactivación económica y destrucción activa o pasiva se contradicen. Mientras no se termine con la guerra por medios no violentos, el terremoto de la guerra no dejará que nazca la paz, que se consolide la democracia y que se reactive la economía.

4. Caminos de pacificación y de reconstrucción

Para terminar con los daños del terremoto del 10 de octubre y, sobre todo, para frenar el terremoto de la guerra, algunos puntos básicos deben ser puestos en marcha. No podemos entrar en detalles, pero estos puntos sirven al menos de criterio para lo que ha de hacerse y lo que ha de omitirse.

a) Salida negociada al conflicto armado

Tanto por el fracaso de otros medios emprendidos para terminar con la guerra como por el clamor nacional e internacional en favor de una salida negociada, debe concluirse que ésta es una necesidad histórica, plena de legitimidad y respaldada por la voluntad popular. Apenas nadie se atreve a condenar esta vía de solución, si no son los partidarios de las posiciones más extremas o los que miran más por sus propios intereses que por los intereses generales o el bien común del pueblo salvadoreño. Las iglesias sobre todo, las más cercanas al sentir popular y en especial la iglesia católica a través de Monseñor Rivera Damas, hace ya años que están clamando y trabajando por esta solución, respaldada por la conferencia episcopal y



Guerra y pacificación se contradicen, democratización y militarización se contradicen, reactivación económica y destrucción activa o pasiva se contradicen.

desde Roma por el propio Juan Pablo II. Los sindicatos independientes, pero también los sindicatos, cooperativas, gremios, más próximos al gobierno, exigen una solución negociada; tanto la UNTS como la UNOC, que en conjunto representan cientos de miles de afiliados o simpatizantes, así lo han proclamado públicamente. También algunos de los partidos políticos como el PCN, el PDC en el gobierno, el PSD y otros se inclinan en sus pronunciamientos, aunque no siempre en los hechos, por el diálogo y la negociación. Casi todo el sector educativo, y desde luego las universidades más importantes, se va convenciendo a sí mismo y trata de convencer a otros sectores de la perentoriedad no sólo de un diálogo entre las partes en conflicto, sino entre todos los sectores sociales. Hasta las partes en conflicto, al menos en cuanto una está representada por el FMLN-FDR, profesan públicamente su deseo de dialogar y de negociar hasta el punto de haber tenido ya dos reuniones en La Palma y Ayagualo donde se alcanzaron algunos acuerdos, que después no han sido continuados.

Por todo ello, por la razonabilidad suma de esta solución, por el gran consenso nacional en términos cuantitativos y cualitativos que hay en torno a la necesidad de reemprender esta vía, tanto la Fuerza Armada, como el gran capital y los partidos y medios de comunicación que los representan, así como Estados Unidos, debieran responder democráticamente a este clamor popular, debieran dejar de poner impedimentos innecesarios y dejar de confiar en la solución militar. Una solución militar al conflicto salvadoreño es en sí misma mala y llevará a males permanentes para la democratización del país, para el desarrollo integral de las mayorías populares y para la paz y colaboración regional centroamericana.

b) Consolidación del proceso democrático

Si consideramos nuestra situación política en comparación con los días más negros de la historia salvadoreña, los transcurridos entre 1980 y 1982, puede sostenerse que se ha avanzado bastante. Pero si la consideramos en relación a lo que debe ser una democracia verdadera, ha de decirse que resta mucho por hacer. Ni las elecciones han sido todavía lo que deben ser, ni el poder civil tiene suficiente autoridad y poder sobre la Fuerza Armada, ni el poder judicial es confiable, ni han cesado las graves y numerosas violaciones de los derechos humanos, lo cual nos ha puesto de nuevo este año ante el veredicto de la asamblea general de las Naciones Unidas. Pueden, apreciarse en todos estos renglones algunos avances, que no dejan de tener su importancia, pero estos avances no tienen la extensión, la profundidad y sobre todo la solidez suficiente para afirmar que hemos entrado irreversiblemente en un proceso de democratización.

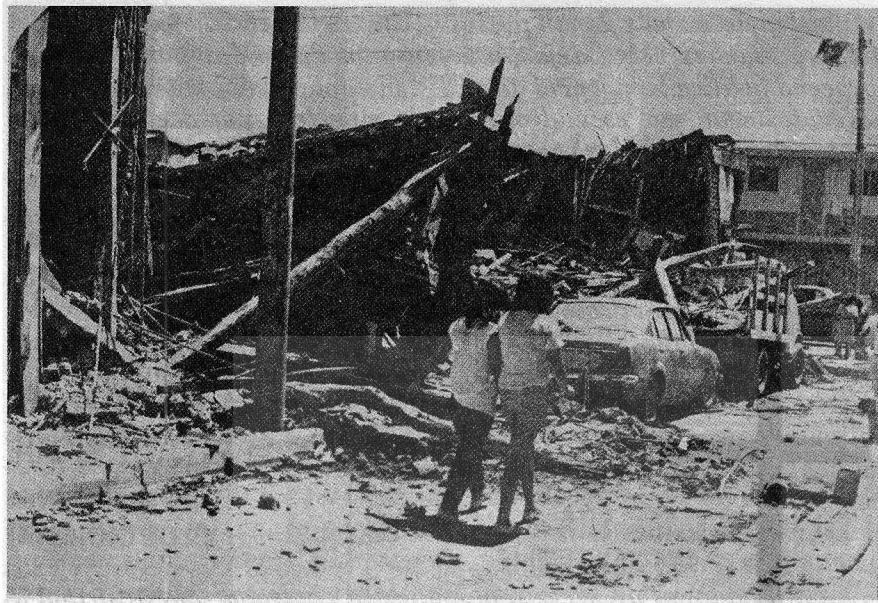
La existencia de más de mil presos políticos, la persistencia de decretos que muchas veces dejan indefensos a detenidos por cualquier sospecha política la vigencia de un Estado policial, los muertos y desaparecidos sean por escuadrones de la muerte o por acciones de la Fuerza Armada o de los cuerpos de seguridad siguen siendo comprobados por organismos que merecen respeto internacional. Ciertamente la exigencia de una dura y sucia guerra así como el accionar permanente del FMLN no facilitan la apertura democrática y el propio frente revolucionario perpetra acciones contra los derechos de la población civil, al mismo tiempo que impulsa sus propios métodos de guerra irregular. Por ello hay que exigir a ambas partes que, a través del diálogo y de la negociación entre ellos, pero sobre todo a través de atender las necesidades y los intereses de la mayor parte del pueblo, vayan logrando bilateralmente, y si es necesario unilateralmente, avances sólidos en la democratización del país.

c) La recuperación de la soberanía nacional

Para nadie es un secreto que nuestra contrapartida principal a la ayuda millonaria de Estados Unidos es la hipoteca de nuestra soberanía. Una guerra en gran parte impuesta y prolongada por ellos y para ellos es financiada con sus dólares, pero esta guerra, además de costarnos la destrucción paulatina del país y la pérdida de miles de vidas salvadoreñas, trae consigo inevitablemente, mientras dure, la drástica reducción de nuestra soberanía. Ni siquiera estamos de lado y junto a los países latinoamericanos de Contadora y del Grupo de Apoyo, sino que estamos al lado de Estados Unidos tanto en los problemas de Centroamérica como en los problemas estrictamente nacionales. Ciertamente algo parecido le pasa a Honduras y Costa Rica, pero esta disminución de la soberanía no se disimula o disculpa con ello. La solidaridad y la identidad latinoamericana pasan hoy en los asuntos de Centroamérica por el espíritu de Contadora y del Grupo de Apoyo, que están además ampliamente respaldados por la comunidad internacional.

Esta falta de soberanía es una de las causas principales de la no resolución del conflicto y desde luego de la no resolución del conflicto según nuestros propios intereses. La superación del conflicto interno no se logrará encuadrándolo en el conflicto este-oeste y sometiéndonos a los intereses norteamericanos, como hasta ahora se está haciendo. Se trata ante todo de un problema y una solución que afecta ante todo a los salvadoreños y que debe resolverse entre salvadoreños, sin que ello obste a una sana colaboración con otros países, que respeten nuestra soberanía y no conviertan su ayuda en injerencias.

Las universidades, cada una en particular y, en cuanto es posible según lo requiera la ocasión, unidas y mancomunadamente deben comprometerse a seguir siendo conciencia vigilante y actuante en favor de las grandes tareas nacionales.



d) Readecuación del presupuesto nacional y de la ayuda exterior

Ya hemos dicho anteriormente que el presupuesto nacional está centrado en la guerra y en la destrucción, así como lo está la ayuda exterior norteamericana, que El Salvador recibe en mayor monto que cualquier otro país latinoamericano. Antes del terremoto del 10 de octubre ya era evidente que un presupuesto así tiene sentido para los partidarios de la guerra prolongada, pero no para los defensores de la paz consolidada. Incluso las medidas económicas anunciadas por el presidente Duarte y conocidas como "el segundo paquetazo" encontraron un rechazo casi universal, no sólo porque suponían una nueva carga económica, sino sobre todo porque tenían como uno de sus objetivos principales el financiamiento interno de la guerra. Pero después del terremoto, cuando ha de hacerse frente no sólo a una tarea de reactivación, sino que se han de intentar paliar los cuatro o cinco mil millones de colones de pérdidas que ha supuesto el sismo metropolitano, carece de sentido mantener en sus mismos términos el presupuesto presentado a la asamblea y las medidas ideadas para financiar la guerra. Lo que hay que financiar y presupuestar ahora es la reconstrucción y eso ciertamente no se va a lograr con los 50 millones de dólares que para ese fin específico ofrece Estados Unidos, ni siquiera con otras ayudas internacionales.

Si, en cambio, se tomara en serio la reconstrucción, si se lograra una cierta unidad nacional para poner el máximo esfuerzo en reconstruir y reactivar, muchas cosas podrían cambiar en poco tiempo. Se ha rechazado muy fácilmente la idea de una tregua prolongada en la guerra de todos los días y se rechazó inconsultamente la propuesta que sobre este punto hizo el FMLN-FDR. Podrá decirse que es de su conveniencia y por tanto no de la conveniencia militar de sus contra-

rios. Pero también la ha propuesto la Iglesia y otros sectores sociales que no pueden ser considerados parte interesada y que se han preguntado no qué es mejor para las partes en conflicto o qué es mejor para el proyecto norteamericano sobre El Salvador y Centroamérica, sino qué es mejor para el pueblo salvadoreño, sacudido hace 6 años por el terremoto de la guerra y el 10 de octubre por el terremoto de la capital. Desde esta tregua y aun sin ella pueden arbitrarse más recursos, sacados de quienes más tienen, para que bien orientados se empiece a dar una reconstrucción creciente y una reactivación sólida.

Es hora en definitiva de revisar el presupuesto nacional, el conjunto de medidas económicas y aun la política entera del gobierno para que se haga lo que nos está exigiendo hacer el terremoto, ese doble terremoto que asuela nuestro país.

e) El reforzamiento del sistema educativo

No trabajaríamos como universidades ni nos pronunciaríamos como tales, si no pusiéramos especial atención al problema educativo del que somos en gran parte responsables por múltiples razones. Y al poner los ojos en el sector educativo no podemos menos de constatar que, en gran parte por efecto de la guerra, el proceso educativo se va deteriorando en el país hasta límites del todo inaceptables. No estábamos bien antes de la guerra, pero hoy estamos mucho peor. La destrucción de escuelas rurales y la falta de condiciones mínimas ambientales para la educación básica de esa mayor parte de la población nuestra que vive todavía en el campo; la aglomeración de alumnado en las ciudades en centros educativos que carecen de las instalaciones y del profesorado mínimamente adecuado; la multiplicación de las universidades y la masificación de la educación universitaria que recoge su alumnado con muy baja preparación y no puede darle en muchos casos los mínimos requeridos por un título universitario, dan una perspectiva del empeoramiento de esta parte fundamental de nuestra sociedad. No sólo nuestros jóvenes están cada vez peor formados, sino que nuestros maestros, en todos los niveles, están también peor preparados. Con esto el futuro de un país superpoblado como el nuestro no puede mirarse más que con pesimismo. Necesitaremos todavía más años para alcanzar el nivel educativo suficiente así como para alcanzar ciertos niveles satisfactorios de desarrollo económico.

Para evitar el deterioro mayor y quizá irreversible y para comenzar a poner fundamentos sólidos de cambio en este proceso empobrecedor es menester una nueva política educativa con un presupuesto mucho mayor absoluta y relativamente al que ahora tenemos. Esa nueva política educativa debe poner en revisión todo el proceso tanto respecto de los educandos como de los educadores y debe propiciar de nuevo un máximo respeto para la labor educativa, tan castigada estos años so pretexto de ser responsable de la protesta política. Es un reto histórico que todo el pueblo salvadoreño su go-

Aun si se resolviera la concentración urbana todavía quedaría por hacer en la zona metropolitana. Se ha querido reformar el centro de la capital, cuando lo que urge es reformar en otro sentido más amplio y de cara a las mayorías populares la ciudad entera.

bierno, pero también las universidades deberíamos tomar como prioridad.

f) Superación de los daños del terremoto

El que el terremoto del 10 de octubre no sea sino un elemento más de la grave crisis nacional, no obsta para que sea en sí mismo algo que deba ser atendido debidamente. En un primer momento pasada la atención urgente a los daños más inmediatos, debe provisionalmente lograrse que las personas y los grupos familiares más pobres y más duramente afectados por el sismo recuperen al menos la precaria situación que hasta entonces tenían. Pero eso no puede ser más que un remedio provisional, porque el terremoto ha demostrado no sólo las condiciones inhumanas en que vive una gran parte de la población metropolitana sino la precariedad y la inseguridad que la amenaza. Por ello el terremoto debe servir para replantear la política gubernamental no sólo en los términos generales que se refieren a la solución integral de la crisis total de El Salvador sino también en los aspectos más particulares puestos de manifiesto por el movimiento telúrico.

La concentración poblacional cada vez mayor en la capital se debe en buena parte al problema de los desplazados y, más en general, a la falta de desarrollo mínimamente suficiente en el campo. Este problema sólo se puede paliar si se finaliza la guerra o, al menos, se asegura un respeto total a las personas, a la propiedad y al trabajo de quienes viven en zonas conflictivas tanto por parte del gobierno como del FMLN. Pero requiere además buenos programas integrales de desarrollo rural que sean satisfactorios para la población campesina. Si no hay trabajo suficientemente remunerado, si no hay suficientes instalaciones educativas, sanitarias, etc., no querrá regresar la población rural a su lugar de origen.

Aun si se resolviera la concentración urbana todavía quedaría mucho por hacer en la zona metropolitana. Se ha querido reformar el centro de la capital, cuando lo que urge es reformar en otro sentido más amplio y de cara a las mayorías populares la ciudad entera. Algunos principios de esta reforma urbanística vienen exigidos por el subsuelo tan propenso a periódicos movimientos telúricos, pero otros vienen exigidos por las características sociales de nuestra población sumida en extrema pobreza, que han traído y pueden seguir trayendo periódicamente movimientos sociales que trastornan y sacuden la convivencia. Las medidas que se tomen con ocasión de la reconstrucción pueden ser pasos iniciales que, si están bien dados, pueden orientar todo un proceso nuevo, que supere los males pasa-



dos y algunas de las causas responsables de la gravedad de la catástrofe.

5. Contribución de las universidades a la pacificación y reconstrucción del país

La tarea de pacificación y reconstrucción del país es ciertamente tarea de todos los salvadoreños, pero cada uno y cada sector debe contribuir a ella de forma específica según los medios de que dispone y según sus propias características. Las universidades, como decíamos al principio de este pronunciamiento, tienen una especial responsabilidad por estar obligadas a atender y promocionar la realidad del país desde la ciencia, la técnica, el humanismo y la cultura, que en buena parte están en sus manos como está bajo su responsabilidad la formación de miles de profesionales que debieran salir de sus aulas intelectual, técnica y moralmente preparados para contribuir al bienestar de todo el pueblo.

No es el momento de desmenuzar cuáles deben ser las tareas y los programas que las universidades deben tomar hoy prioritariamente en sus manos para cumplir mejor con su misión. Tan sólo quisierámos formular y comprometernos en algunos principios consensuados, que debieran regir nuestras acciones en este momento.

Sea en primer lugar el compromiso de mejorar al máximo nuestra labor universitaria aprovechando al máximo los pocos recursos disponibles para la mejora rápida y consistente de la docencia, la investigación y la proyección social. Son pocos los recursos humanos y materiales disponibles y ya dijimos que el Estado debiera preocu-

parse por ampliarlos. Pero los que tenemos, deben ser utilizados más racional y responsablemente. Esperamos que una nueva ley de la educación superior trate de superar los fallos notables que hoy día se dan en ella y propicie nuevas metas de desarrollo educativo. Queda mucho por hacer en la investigación, queda mucho por mejorar en planes y en los métodos de docencia, queda mucho por realizar directamente en favor de la sociedad, principalmente en el campo de la cultura y de la educación, pero también en otras áreas de competencia universitaria. Es difícil que la universidad marche bien cuando el país marcha mal, pero esto no obstante la universidad puede mejorar y con ello el país mejorará.

En segundo lugar, las universidades, cada una en particular y, en cuanto es posible según lo requiera la ocasión, unidas y mancomunadas deben comprometerse a seguir siendo conciencia vigilante y actuante en favor de las grandes tareas nacionales. Apenas se tienen en cuenta las razones y las voces de las universidades sobre los grandes problemas del país, cuando ellas por su capacidad intelectual y su desinterés partidarista y/o materialista están en posibilidad de hacer importantes aportes a la política nacional. No es que pretendamos volver al viejo sueño platónico de que los filósofos sean los reyes de la ciudad, pero sí de que se logre de algún modo que la voz de la inteligencia desinteresada a la par que comprometida de los universitarios sea tenida en cuenta a la hora de proponer soluciones y de orientar decisiones. Las universidades, puestos los ojos en los intereses fundamentales de la mayor parte de la población, tienen que vigilar si las políticas gubernamentales o empresariales van realmente dirigidas a satisfacer esos intereses o, al contrario, a contradecirlos por ponerse al servicio de intereses particulares nacionales y extranjeros.

En tercer lugar, las universidades deben esforzarse en producir más y mejor. Y esto no sólo en el campo de los profesionales, logrando que de sus recintos salgan los que realmente necesita el país, sino en el campo más amplio de formular aquellos proyectos generales y sectoriales de desarrollo en lo económico, tecnológico, jurídico, educativo, sanitario, cultural, etc. No se trata de reducirse a ideas generales y abstractas, sino que han de lograrse proyectos operativos que puedan ponerse en práctica tanto por el sector público como por el sector privado. Ello requiere un gran conocimiento de la realidad nacional junto con una gran creatividad para adecuar a esa realidad los conocimientos y las técnicas que tal vez han surgido en otra parte, pero que son de utilidad para nuestra situación. Y esto tanto en proyectos de aplicación inmediata como sobre todo en proyectos de mayor alcance, pues a veces la carga de las tareas inmediatas, docentes y administrativas no permite realizar aquellos trabajos indispensables para la elaboración de soluciones de gran aliento. En este sentido es importante subrayar la necesidad de recuperar el gran número de excelentes talentos que por razones políticas o económicas están hoy fuera de El Salvador sin dar la contribución nacional y patriótica que podrían dar. Su recuperación no sólo elevaría grande-

mente la altura académica de las universidades, sino que permitiría a éstas aquella labor de investigación y de proyección social que tanto necesita el país.

Al hacer presentes estas reflexiones a la comunidad nacional y a las distintas fuerzas sociales hemos querido iniciar un medio de comunicación pública de un amplio espectro del sector universitario. Quisiéramos que esta pequeña contribución consiguiera favorecer el proceso de reconstrucción y pacificación del país, respecto del cual reiteramos nuestro compromiso que intentaremos llevarlo a la práctica por todos los medios que nos posibilite y nos exige nuestra condición de universitarios. La tarea es de muchos y a todos invitamos a que cada quien ponga su parte para que entre todos, lo más pronto posible, venga la paz a El Salvador, traigamos la paz a nuestro país, una paz que se fundamente en la justicia y posibilite la libertad de todos los salvadoreños.

30 de octubre de 1986.

